



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
63755684_0313000031242424044.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	LAURA EUGENIA LARA DIAZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.02.cf.96	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	01/10/23 19:46:09 - 01/10/23 13:46:09	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	94 12 5d b6 b7 b8 e0 ac 97 55 5e b7 60 72 e6 e2 32 7e d4 7b 55 c3 b5 20 20 f1 2a 7e cc 6e 21 15 f4 ca 11 27 97 ce 57 e8 26 92 3c c8 6b 6f 9f c2 f9 a7 96 6a 6a e9 1d 2b 13 40 3f a4 0f 9f f6 f0 72 36 82 05 6c 67 5c 25 1b 82 8c 6c cc c3 e6 79 29 24 7b 9f fb 4e 7c ea 83 9a a1 42 df b7 37 b9 f3 28 d0 17 66 15 76 81 16 fa ad 0c 98 25 77 f1 ea 41 e4 a7 78 78 c8 c4 6f 15 0f 40 3f bb a3 a1 23 64 7c 26 6a 4e 2c c6 7e fe 8c 74 57 48 0d 0b a2 44 86 b1 ee 6c 7b 33 f1 7b b4 57 03 f5 b4 8d bb ab 97 78 f5 c7 e2 b1 80 a6 9d d6 1a 30 1a 25 7e ed 60 54 a1 47 fe a0 1a 17 4a 8e 6a 34 34 79 eb 49 b1 08 78 24 14 9b 2b 08 b6 b2 c3 be 90 58 70 e7 2c cf 9a ed 1a 29 89 78 f8 36 a9 24 3b 6d d6 bb b6 d3 5f 1f 2b 4f 8f 5c 8d 92 bc e6 45 dd 9c 79 c1 34 c7 83 12 40 b7 f2 d0 5b c3 20 cd 85			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	01/10/23 19:46:10 - 01/10/23 13:46:10			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	01/10/23 19:46:10 - 01/10/23 13:46:10			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	48688587			
Datos estampillados:	c91osSoS7g+dmqFUPZzdaU5H7oo=			

SENTENCIA.

cuestiones relacionadas con la descarga de aguas residuales y tratadas, es de competencia estrictamente municipal, como se procede a demostrar conforme a las siguientes consideraciones.

Para estar en aptitud de determinar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta; es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión primero se debe identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que el quejoso indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, soslayando la exigencia objetiva de que en realidad exista la obligación de obrar en determinado sentido.

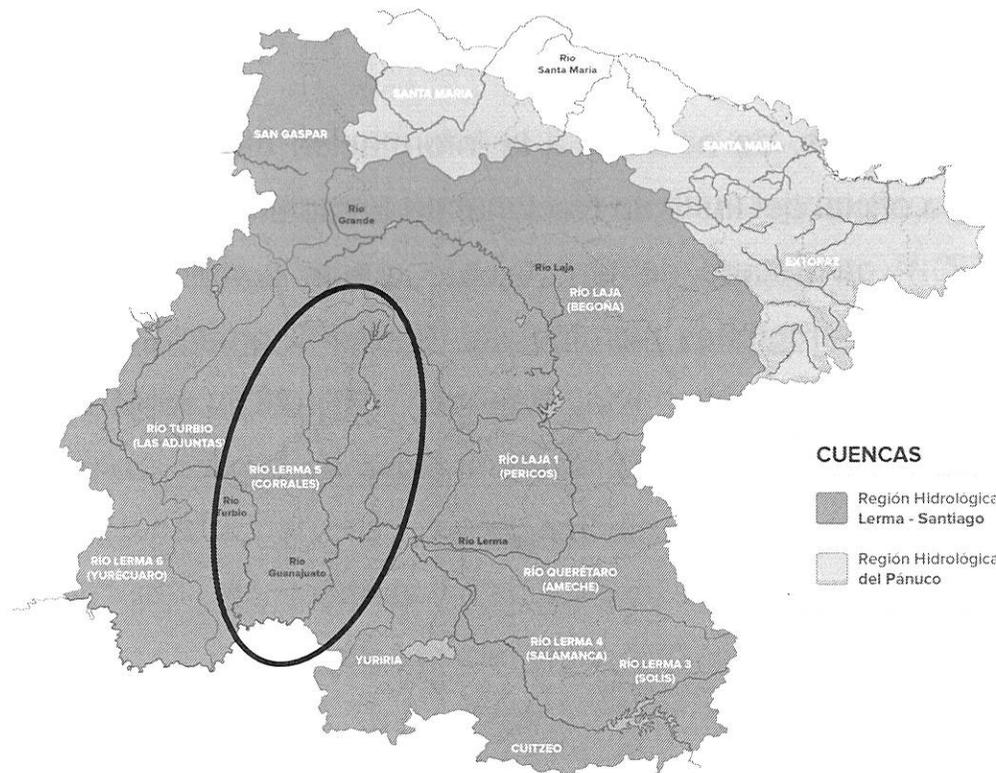
Lo anterior, conforme a la tesis 1a. XXIV/98¹, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ***“ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO”***.

Ahora, a fin de delimitar la competencia de las autoridades responsables, y con ello la exigibilidad de la actuación que se les reclama, es necesario acudir, en primer lugar, al quinto párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que establece que las aguas nacionales son las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las

¹ Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, junio de 1998, página 53, con registro digital 196080.

SENTENCIA.

También, en la mencionada página del INEGI, se establece que la región 12 está dividida en cuencas, de las cuales seis incluyen porciones del estado y, concretamente, la cuenca Río Lerma-Salamanca (12 B), incluye los afluentes del centro de la entidad, donde destaca el Río Guanajuato-Silao (12-BD), que para efectos de mayor claridad, se inserta el siguiente mapa (lo circulado es propio)⁵:



Asimismo, la mencionada fuente de consulta oficial, asevera que en las cercanías de la ciudad de Irapuato, el río Lerma recibe descargas de los ríos Guanajuato y Silao, destacando que el río Guanajuato “deposita aguas residuales de la propia ciudad de Guanajuato [...]”⁶.

Por otra parte, si bien el artículo 122 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato⁷, establece de manera genérica que es

⁵ Obtenido de la página oficial de la Comisión Estatal del Agua del estado, en el link: "<https://agua.guanajuato.gob.mx/cuencas.php>"

⁶ Op. cit., nota 3.

⁷ **Artículo 122.-** Es competencia del Ejecutivo del Estado y de los ayuntamientos, para evitar la contaminación del agua de jurisdicción estatal:

I.- Las descargas de origen industrial o agropecuario que viertan al alcantarillado municipal o a cualquier cuerpo receptor de aguas de jurisdicción estatal;
II.- Las descargas de origen municipal y su mezcla incontrolada con otras que se viertan a cuerpos receptores de aguas de jurisdicción estatal;



SENTENCIA.

competencia del Ejecutivo del Estado y de los ayuntamientos, lo relativo a las descargas de origen municipal y el vertimiento de residuos sólidos no peligrosos en cuerpos y corrientes de agua; lo cierto es que tal asignación, está directamente dirigida a evitar la contaminación del agua de jurisdicción estatal⁸, que es aquella que no reúne las características de propiedad nacional ni particular, en términos del artículo 27 de la Constitución Federal; lo que deviene jurídicamente relevante en el caso concreto, pues como se dijo, el río Guanajuato se encuentra dentro del concepto de aguas nacionales en términos del citado numeral de la Norma Fundamental.

Con lo anterior en mente, en adición a la interpretación realizada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito⁹ —que conoció de la revisión interpuesta en contra de la suspensión definitiva decretada en el presente asunto—, se obtiene que **el caso concreto del río Guanajuato, constituye una corriente de agua de competencia federal**¹⁰; no obstante, lo que se refiere al manejo, funcionamiento y mantenimiento del sistema de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, **le compete al municipio de Guanajuato y a su organismo operador**, dado que es un servicio público que le corresponde en términos del artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal¹¹, tema sobre el que se abundará en el siguiente considerando.

III.- Las descargas de desechos, sustancias o residuos generados en actividades de extracción de recursos no renovables; y

IV.- El vertimiento de residuos sólidos no peligrosos en cuerpos y corrientes de agua.

⁸ Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato:

“Artículo 6. Son aguas de jurisdicción estatal aquéllas que no reúnan las características de propiedad nacional ni particular, en los términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

⁹ Incidente en revisión administrativo 42/2023, resuelto el cuatro de mayo de dos mil veintitrés.

¹⁰ Motivo por el que se excluye a los titulares del ejecutivo y de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial locales.

¹¹ **Artículo 115.** Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

[...]

SENTENCIA.

Por lo tanto, dado que las atribuciones en materia del sistema de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales constituye una competencia municipal y de su respectivo organismo operador en la materia, cualquier atribución genérica no es suficiente para atribuirles una obligación directa a los titulares del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, ambos del Estado de Guanajuato; de ahí que **deban tenerse por inexistentes las omisiones que se les reclaman**, sin que lo anterior implique que eventualmente no puedan tener el carácter de coadyuvantes para lograr objetivos concretos en materia de conservación, protección y restauración del medio ambiente.

En tales condiciones, lo procedente es **sobreseer en el juicio**, por lo que hace al Titular del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, ambos del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo¹².

CUARTO. Certeza del acto atribuido a las autoridades A, B y D. Es cierto el acto reclamado al Presidente del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, al Director General y responsable del funcionamiento de la Planta Tratadora de Aguas Residuales Centro del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, así como al Ayuntamiento, todos del Municipio de Guanajuato.

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

[...]

¹² **Artículo 63.** El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

[...]

IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y

[...]



SENTENCIA.

Ello, pues a pesar de que negaron la existencia de la omisión que se les reclama, lo cierto es que la normatividad aplicable les confiere una serie de obligaciones —de carácter positivo y negativo—, relacionadas con la gestión de las aguas residuales, su tratamiento, conducción adecuada y las acciones necesarias para la prevención y control de la contaminación por el depósito de esas aguas residuales en un cuerpo de agua, como es el caso del río Guanajuato.

Como se detalló en el considerando tercero, en el río Guanajuato se depositan aguas residuales provenientes de la ciudad capital, por lo que en el caso resulta relevante el contenido del artículo 3, fracción L, de la Ley de Aguas Nacionales, que define al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, como el ***“conjunto de obras y acciones que permiten la prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el saneamiento, entendiéndose como tal la conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de las aguas residuales”***.

En ese tenor, las siguientes normas establecen una serie de obligaciones al municipio y al organismo que ejerce la administración del agua:

- El artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal¹³, establece que el municipio es la autoridad competente en relación con el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

¹³ **Artículo 115.** Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

[...]

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

[...]

SENTENCIA.

- El artículo 8, fracción VII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente¹⁴, establece que a los municipios les corresponde aplicar esa norma y las leyes locales, en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población.

- De acuerdo al numeral 119 bis, fracciones I y II, de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente¹⁵, en relación con la prevención y control de la contaminación del agua, le corresponde al gobierno de las entidades federativas y de los municipios, por sí o a través de sus organismos públicos que administren el agua, el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así como la vigilancia de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. Además, tal obligación asignada a los municipios, es reiterada en el segundo párrafo del artículo 88 de la Ley de Aguas Nacionales¹⁶.

- Debe entenderse por "descarga"¹⁷, la acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor; en el entendido de que "cuerpo receptor"¹⁸, se

¹⁴ **Artículo 8o.** Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

[...]

VII. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los estados;

[...]

¹⁵ **Artículo 119 bis.** En materia de prevención y control de la contaminación del agua, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas y de los Municipios, por sí o a través de sus organismos públicos que administren el agua, de conformidad con la distribución de competencias establecida en esta Ley y conforme lo dispongan sus leyes locales en la materia:

I. El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado;

II. La vigilancia de las normas oficiales mexicanas correspondientes, así como requerir a quienes generen descargas a dichos sistemas y no cumplan con éstas, la instalación de sistemas de tratamiento;

[...]

¹⁶ **Artículo 88.** [...]

El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado de los centros de población, corresponde a los municipios, con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes.

¹⁷ Consúltese el artículo 3, fracción XXII, de la Ley de Aguas Nacionales.

¹⁸ Consúltese el artículo 3, fracción XVII, de la Ley de Aguas Nacionales.

SENTENCIA.

ambiental, que implica un análisis con mayor detenimiento respecto de la obligación relacionada con la definitividad, en atención al principio *pro actione* que rige de manera especial en el derecho al medio ambiente, de conformidad con el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo²⁵.

De ese modo, ante la falta de la obvia y objetiva constatación de la causa de improcedencia invocada por las autoridades responsables, debe desestimarse su afirmación sin mayor análisis.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 137/2006²⁶, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido:

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación.

²⁵ PRINCIPIO 10

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

²⁶ Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, octubre de 2006, página 365, con registro digital 174086.



SENTENCIA.

Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio.”

[Lo subrayado es propio]

Por otra parte, la síndica del Ayuntamiento del Municipio de Guanajuato, considera que los promoventes de amparo carecen de **interés legítimo** —causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo—, porque no ofrecieron las pruebas adecuadas para demostrar que tienen un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que con la concesión del amparo podría traducirse en un beneficio a su favor, pues ni siquiera demostraron que previo a la promoción del amparo, hayan solicitado información o alguna acción relacionada con la situación del río y que les hubiese sido negada por parte del Ayuntamiento.

Son **infundadas** las consideraciones aludidas, ya que los peticionarios acreditaron que tienen interés legítimo en el presente asunto, partiendo de la idea de que en materia ambiental se debe privilegiar el acceso a los recursos —pro actione—, a partir de los principios de precaución y de participación ciudadana que imperan. Se explica.

Como punto de partida, debe decirse que el derecho al medio ambiente se encuentra previsto en el artículo 4º de la Constitución Federal, en el que se consagra la prerrogativa de toda persona a gozar de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, en adición a que el Estado garantizará el respeto a este derecho.



SENTENCIA.

efecto, los actos u omisiones del Estado han generado una violación al derecho humano a un ambiente sano.

- En el amparo en revisión [REDACTED] de la Segunda Sala, se consideró que la protección al medio ambiente sano exige la **participación solidaria de la ciudadanía**, al ser la preservación y restauración del medio ambiente un asunto de orden público e interés social, cuyo cumplimiento requiere una responsabilidad solidaria y participativa —aunque diferenciada— entre el Estado y la ciudadanía.

- A nivel internacional, existen fuentes que permiten sostener que el derecho a un medio ambiente sano impone la obligación a los Estados de facilitar la participación en la toma de decisiones ambientales, así como dar **acceso a recursos efectivos** para su tutela.

- El Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo²⁷, establece una obligación de garantizar el acceso a recursos efectivos para la protección del medio ambiente.

- Asimismo, la directriz 18 de las Directrices de Bali²⁸, estipula que los Estados deben dar una interpretación amplia del derecho a iniciar una demanda en relación con los asuntos ambientales, con miras a lograr el acceso efectivo a la justicia.

- En ese contexto normativo, la referida Sala determinó que el análisis de acreditación del interés legítimo

²⁷ **PRINCIPIO 10**

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

²⁸ **DIRECTRIZ 18**

Los Estados deberían dar una interpretación amplia del derecho a iniciar una demanda en relación con asuntos ambientales con miras a lograr el acceso efectivo a la justicia.

SENTENCIA.

de una persona para promover un juicio de amparo indirecto en materia ambiental, debe estar sujeto a un escrutinio de flexibilidad y razonabilidad, esto es, **a la luz de los principios pro actione, pro persona y de precaución en materia ambiental.**

- Conforme a lo anterior, el promovente de amparo debe acreditar, al menos en forma indiciaria, que tiene la aptitud de expresar un agravio diferenciado del resto de los demás integrantes de la sociedad o si resiente una afectación en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o si deriva de una situación particular que tiene en el orden jurídico. Lo que sucede, por ejemplo, cuando el peticionario acredita que habita una localidad donde se aduce la existencia de un daño ambiental; o cuando habita una zona que, pudiendo estar alejada geográficamente, se encuentra conectada por los mantos acuíferos, cuencas hidrográficas o por la interconexión de las cuencas atmosféricas.

Asimismo, en el citado amparo en revisión [REDACTED], la Segunda Sala determinó que en ese caso, bastaba la exhibición de una copia simple de la credencial de elector del quejoso, pues era un indicio suficiente para acreditar su calidad de habitante de un municipio donde se alegaba una afectación ambiental. Esto, en adición al siguiente razonamiento:

"[...] como cualquier habitante del Municipio, es beneficiario de las condiciones ambientales que generan los árboles y en consecuencia, basta con acreditar esta situación y no una pertenencia específica a la colonia en donde se emitió el permiso de tala para que se pueda reconocer su interés legítimo para reclamar aquellos actos que a su juicio transgreden el derecho a contar con un medio ambiente sano.

De igual forma, [...] el quejoso argumentó una afectación directa a su esfera jurídica entendida en un sentido amplio, por lo que la concesión del amparo le reportaría un beneficio determinado en su esfera jurídica, en la medida

SENTENCIA.

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que este apartado se limitará a sintetizar los argumentos de mayor relevancia, desarrollados en el amparo en revisión [REDACTED]

En la ejecutoria de referencia, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, sostuvo lo siguiente:

- Las fuentes convencionales en la materia ambiental, permiten colegir que los Estados **"tienen la obligación de proteger [a las personas] contra los daños ambientales que interfieran en el disfrute de los derechos humanos"**³¹. Así, los Estados están obligados a: (I) adoptar **"y aplicar marcos jurídicos para proteger contra daños ambientales"** que puedan vulnerar los derechos humanos, y (II) **"regular a los agentes privados"** para proteger contra esos daños³².

- Una vez que un Estado haya adoptado normas medioambientales en su legislación, *deberá aplicarlas y cumplirlas*; pues no basta **"si estas medidas sólo quedan en el papel y no van acompañadas de medidas adicionales y concretas destinadas a impedir que se produzcan daños [...] y la reparación efectiva del daño ambiental ocasionado"**³³.

- Los esfuerzos del hombre por mejorar el medio en que habita y elevar su nivel de vida, dependen en gran medida de la disponibilidad de agua, existiendo una **correlación esencial** entre la calidad del agua, derecho a un medio ambiente sano y salud pública.

³¹ ONU. Informe del Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox. 30 de diciembre de dos mil trece. Párrafo 44.

³² Ibidem. Página 46.

³³ ONU. Informe del Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox. 30 de diciembre de dos mil trece. Párrafo 56.

SENTENCIA.

sensibilización y la aplicación".⁴⁰

- En el entendido que prestar una mayor atención a la gestión de las aguas residuales desde una perspectiva de derechos humanos *no implica, necesariamente, que todos deban estar conectados a instalaciones de tratamiento de aguas residuales, ni que de la noche a la mañana deba emprenderse la gestión adecuada de las aguas residuales.*

- Con arreglo al marco de derechos humanos, las medidas y tecnologías que se adopten incluidas las soluciones de saneamiento, *deben ser apropiadas para cada contexto dado y acorde a las obligaciones jurídicas que impongan las leyes internas, y esas medidas han de adoptarse gradualmente para avanzar por etapas.*

- Empero, los Estados deben avanzar de la *forma más ágil y eficaz posible* para **"garantizar el acceso a servicios de saneamiento seguros, asequibles y aceptables para todos, que proporcionen intimidad y preserven la dignidad"**. Esto requiere medidas **"deliberadas, concretas y orientadas hacia la plena realización"**,⁴¹ en particular con miras a crear un entorno propicio para que las personas ejerciten sus derechos relacionados con el saneamiento.

- Diversos organismos de derechos humanos han entendido, por tanto, que en términos amplios el saneamiento de las aguas **"incluye el tratamiento y la eliminación o reutilización de excrementos y las aguas residuales asociadas"**.⁴² **El saneamiento "se puede definir como un sistema para la recogida, el transporte, el tratamiento y la**

⁴⁰ *Ibidem*. Párrafo 65.

⁴¹ ONU. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque. 1 de julio de 2009. Párrafo 64.

⁴² ONU. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque. 5 de agosto de 2013. Párrafo 21.

SENTENCIA.

Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (*fojas 60 a 80*), se obtienen los siguientes datos relevantes:

- El seis de marzo de dos mil veinte, la Comisión Nacional del Agua le otorgó al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, una concesión para descargar aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la Nación. Además, la concesión tiene una vigencia de diez años (*fojas 66 y 67*).
- En la cláusula tercera de las condiciones generales, se estableció que el derecho a descargar aguas residuales en cuerpos receptores debe ejercerse de acuerdo a ese permiso, a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, así como conforme a las demás disposiciones jurídicas aplicables (*foja 68*).
- El tratamiento de las aguas residuales, previo a su descarga al cuerpo receptor, debe cumplir con la NOM-001-SEMARNAT-1996 (*foja 69*). Esto, en el entendido de que la diversa NOM-001-SEMARNAT-2021⁴⁶, entró en vigor el once de marzo de dos mil veintitrés —fecha posterior a la presentación de la presente demanda de amparo—, con las precisiones previstas en sus transitorios primero a quinto⁴⁷.

⁴⁶ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintidós.

⁴⁷ PRIMERO. La norma oficial mexicana entrará en vigor a los 365 días naturales, posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo previsto en el Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios.

SEGUNDO. Los parámetros y límites permisibles previstos en las tablas 1 y 2, así como el Apéndice Normativo entrarán en vigor el 3 de abril de 2023.

TERCERO. Los parámetros y límites permisibles de color verdadero y toxicidad aguda previstos en la Tabla 1, entrarán en vigor al cuarto año de la fecha de publicación de la presente Norma Oficial Mexicana en el Diario Oficial de la Federación.

CUARTO. Las autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones, podrán elaborar Lineamientos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, por los cuales los sujetos regulados puedan presentar programas para el cumplimiento oportuno de la presente Norma.

QUINTO. Hasta en tanto entren en vigor los parámetros y límites permisibles a que se refiere el artículo Segundo Transitorio, las descargas de aguas residuales seguirán sujetándose a los numerales 4.1, 4.2, 4.3, Tablas 2 y 3 establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de enero de 1997 y su aclaración publicada en el mismo medio de difusión oficial del 30 de abril de 1997.



SENTENCIA.

permisibles en la descarga de agua residual en aguas y bienes nacionales, es la NOM-001-SEMARNAT-1996.

• En esencia, el especialista de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato:

- Precisó en varias de sus respuestas que no contaba con la información suficiente para dar una contestación técnica fundamentada.
- Señaló que la muestra de agua tomada directamente del río no puede considerarse como saneada, ya que no solamente recibía la descarga de la planta de tratamiento.
- Indicó que del informe de ensayos LAQ22-0840⁴⁸ que anexó la autoridad tratadora de agua (fojas 60 a 65), se observaba que los resultados de las descargas de la planta de tratamiento cumplían con los límites máximos permisibles para descarga a ríos y en la modalidad referente a la protección de la vida acuática, conforme a la NOM-001-SEMARNAT-1996.
- Asentó que en el informe de ensayos LAQ22-0840, respecto del contaminante “coliformes fecales”, el resultado se encuentra dentro del límite máximo permisible.
- En sus conclusiones, expresó que el río Guanajuato presentaba en su cauce, contaminantes de naturaleza diversa y que algunas

⁴⁸ Cuyas muestras se obtuvieron del agua residual tratada por la planta de tratamiento de aguas residuales “Guanajuato Centro”.

SENTENCIA.

genera que el sistema de drenaje se estropee y puede ocasionar fugas de aguas residuales que se vierten de manera directa en el río y sin algún tratamiento previo, pues incluso ello **ya aconteció** y tal circunstancia fue constatada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado. Es decir, si bien los particulares pueden arrojar basura y el Estado no tiene injerencia directa en ese tipo de actos, lo cierto es que esas acciones indebidas generan una afectación al sistema de colección, transporte y posterior tratamiento de las aguas residuales, lo que genera una obligación directa por parte de las autoridades encargadas del manejo, funcionamiento y mantenimiento del sistema de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el municipio de Guanajuato.

En la inteligencia de que, como se detalló en el apartado de "*principios generales del derecho a un medio ambiente sano*" de la presente resolución, las obligaciones de protección del medio ambiente no se limitan a que los agentes estatales se abstengan de realizar actos contaminantes, sino que también abarca **el deber de tomar acciones positivas**, concretas y deliberadas tendientes a tutelarlos; así, entre estas acciones, se encuentran labores de prevención y monitoreo, la mejora en la recogida y el tratamiento de contaminantes, la vigilancia, la formulación de políticas, la creación de capacidad, la sensibilización y la aplicación.

Entonces, partiendo de la idea de que en términos amplios, el saneamiento de las aguas incluye el tratamiento, la eliminación o reutilización de excrementos y las aguas residuales asociadas; es dable concluir que las obligaciones de **saneamiento** se refieren a **un sistema para la recogida, el transporte, el tratamiento y la eliminación o**

SENTENCIA.

propició que las tuberías de drenaje se construyeran y “metan” sobre el río, lo que se corrobora con las observaciones realizadas por la actuario judicial que desahogó la inspección de catorce de diciembre de dos mil veintidós. De ese modo, se advierte la existencia de una **actividad de riesgo latente, de que las aguas residuales y sin tratamiento, puedan verterse directamente en el río Guanajuato y contaminarlo.**

Sobre este punto, solo resta decir que el **principio de precaución en materia ambiental**, conforme a la Declaración de Río⁵¹, refiere que frente a la evidencia empírica de que una actividad presenta un riesgo para el medio ambiente, se requiere que se adopten todas las medidas necesarias para evitarlo o mitigarlo, incluso si existe incertidumbre sobre el daño ambiental⁵².

En consecuencia, ante las deficiencias anteriormente destacadas, se estima que en el caso particular se demostró la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, toda vez que las autoridades responsables han evadido asumir una postura activa frente a sus obligaciones de realizar todas las acciones necesarias para garantizar el debido **saneamiento** del agua, pues no solo se refiere a su correcto tratamiento, sino que también abarca todo un sistema para la recogida, transporte y eliminación de contaminantes del agua que se vierte en el río Guanajuato, así como de la basura que obstruye su debido funcionamiento.

⁵¹ PRINCIPIO 15

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

⁵² Razonamiento que encuentra sustento en el cuaderno de jurisprudencia "Contenido y alcance del derecho humano a un medio ambiente sano", página 15, en su Segunda Edición, expedido por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; descargable en la página de Internet: <https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/biblioteca-virtual/contenido-y-alcance-del-derecho-humano-un-medio-ambiente-sano-0>



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	LUIS ALFREDO GOMEZ CANÇHOLA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.dd.d3	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	02/10/23 04:21:20 - 01/10/23 22:21:20	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	65 7d 47 ba 06 f1 60 49 ba b1 5d 5f 01 52 ba e4 3b 51 6b 41 d9 53 98 9f eb e2 80 28 8d 0a af c8 e8 62 0e 8a 8c d0 5d 67 8f 71 46 be 02 6c 7f ad 53 d2 8f 56 86 55 07 fb 21 bc 7d de 4b fa 1f b1 b3 08 29 df 7b d3 54 79 b0 6c 0f 65 6b f7 fa db 0a c8 ed 06 f5 0e 28 4a 40 50 06 ba 9b ad 52 80 af a3 d1 5d 5e 9a 40 a9 ef f6 de 39 61 4f ee 3f cb 31 53 29 ab 0d 51 95 8f 8f 8c 4e d7 18 19 7a c4 43 1d 7b 58 f0 ea a7 c7 11 20 20 29 bd 00 36 24 51 96 77 08 f9 4f dc f2 76 7d 4c 0d ac 63 a3 a3 e2 de a9 a6 cd 17 8a 8d 44 db 73 37 7a 0a d1 dd 81 5a dd 76 fc b7 b0 de 52 2c b8 4f ec b6 8c f3 87 74 00 9a 5c 5a e4 b0 d3 d6 4d ff c9 c0 ca 7f c1 ca 05 b7 06 0c 8f df 5a f8 c5 64 15 f0 2d 42 93 a9 55 8c c1 39 6e 71 0d c0 db 09 c7 2b 63 f7 39 1a d5 05 1e 2a 99 19 f0 32 0e 18 b7 54 0b			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	02/10/23 04:21:20 - 01/10/23 22:21:20			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	02/10/23 04:21:20 - 01/10/23 22:21:20			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	48708805			
Datos estampillados:	+C3baQ6tuW/0vKHtwGODlrFGRPc=			